



Edward Heath: «Nuestra lucha es contra los extremistas».

cios de asistencia médica. Todo inglés vino a participar, en mayor o menor medida, del beneficio colonial: todos se repartieron el botín de la India o de Egipto. La llegada del alivio de las tremendas condiciones de trabajo obvió en gran parte las diferencias sociales. Pero el imperio se perdió en la II Guerra Mundial: se transfirió a los Estados Unidos, a quienes tocó, a su vez, esta consolidación de las clases explotadas. Poco a poco, a medida que las pérdidas materiales que suponían la caída imperial fueron haciéndose notar de nuevo en la creación de abismos entre las clases sociales. El partido laborista no ha sido tan inocente como pretende en dejar que las cosas se deteriorasen. Sus defensas de la economía, de la moneda; sus alianzas especiales con los Estados Unidos, su retraso en sumarse a la institucionalización de Europa (precisamente por su fijación política a los Estados Unidos) han favorecido más al gran capital que al trabajador, que es el sustento y la base de este partido. El problema esencial no está en que el sistema parlamentario y la rotación electoral de partidos en el poder no sirvan o hayan sido desbordados por otras fuerzas, sino que los Comunes (que en su origen representaban a la burguesía y al pueblo frente a la aristocracia, que tenía y tiene su instrumento propio, su Cámara de los Lores) y los partidos dominantes han sido anegados por las clases privilegiadas y no han ejercido su función hasta el extremo para el que habían sido fundados. En este caso, como en tantos otros de otros países, se acusa a fallos de la democracia como organización o idea algo que ha sido previamente desarticulado y pervertido.

La irrupción en plena fuerza del sindicalismo, como va pasando en otros países —Italia, por ejemplo, y en cierta forma, Francia— en forma de presión política se debe, sobre todo, a que la política ha sido vaciada previamente de su contenido para ponerla al servicio de unas clases dominantes, y en detrimento de otras. Fuera de esta canalización, las clases oprimidas o explotadas tienen que buscar otras salidas, aun tan dramáticas como la de la huelga, que nunca es una alegre aventura para quien la emprende, ni nunca puede ser atribuida a un grupo extremista —aunque sea éste quien lleve, en ciertos casos, su dirección, por estar profesionalizado—, sino una acción dolorosa, arriesgada y difícil, y aun teñida de impopularidad en una sociedad predominantemente burguesa, con medios de opinión y de información burgueses. Y, generalmente, sin grandes posibilidades de modificar inmediatamente la sociedad a la que se enfrentan. Es posible que, efectivamente, un triunfo laborista —que en estos momentos parece poco probable, aunque aún queda prácticamente toda la campaña electoral y aunque Gran Bretaña suele ser sorprendente en el momento de votar, digan lo que digan las encuestas previas— consiguiera un apaciguamiento de las huelgas a base de una subida de salarios; pero a la vuelta de poco tiempo estos nuevos salarios quedarían enjugados por el crecimiento de los precios, y los sindicatos se encontrarían entonces exhaustos para emprender una nueva acción de huelgas. Repetamos que poner en marcha una huelga de esta envergadura requiere una organización y unos sacrificios que destruyen las cajas y las fuerzas de los sindicatos. Un gobierno que pudiese realizar una modificación real de las estructuras económicas mediante una participación real de las fuerzas del trabajo en los beneficios de la producción, que pudiera llevar a cabo nacionalizaciones o colectivizaciones, rendiría mejor servicio a la comunidad británica que la desmedrada acción laborista. Sólo que no hay fuerzas políticas en el país capaces de llevar a cabo un programa así; o más bien, que las fuerzas de los enemigos de tal programa son muy superiores. Quizá el partido conservador, con su dureza inmediata y su arriesgadísimo desafío, sea más capaz de vencer al arcaico capitalismo británico de que la época posimperial exige un reparto mayor de las cargas. Será cuestión de que, si ganan estas elecciones, no sigan presentando su triunfo como una victoria sobre un supuesto extremismo, o como una victoria de la democracia sobre minorías agitadoras, sino como el principio de una revisión dolorosa de los principios de riqueza y pobreza y del reparto del poder.

UNAS elecciones más entre Heath y Wilson, a pesar del dramatismo real y del énfasis imaginario de la situación en sus discursos respectivos, tienen pocas probabilidades de equilibrar unos males que les desbordan y para los que no están preparados.

BOLIVIA

¿Los últimos días de Banzer?

La represión por el movimiento de protesta de los campesinos bolivianos —principalmente, en la región de Cochabamba— ha producido ya cien muertos: la cifra puede fácilmente duplicarse si se cumple el llamamiento del presidente Banzer a las poblaciones rurales para que exterminen por sí mismas a los que considera extremistas. Estos datos los da un comunicado de la Comisión Justicia y Paz, de la Iglesia, que está permanentemente opuesta al régimen de Banzer.

Los movimientos de protesta comenzaron a fines del mes pasado. Con el pretexto de estimular la producción, el gobierno dejó en libertad los precios, que habían estado controlados: en muchos casos, éstos subieron entre un 100 y un 150 por 100. El efecto en las zonas más pobres del país fue desolador, y los campesinos iniciaron un movimiento de protesta. Como ocurre con cierta frecuencia en Francia, la protesta campesina consistió principalmente en bloquear las principales carreteras, explicando unas veces a los automovilistas sus motivos, exigiéndoles en alguna ocasión un impuesto especial por cruzar las zonas rurales. Pero Bolivia no es Francia, y Banzer mandó la aviación y las tropas para entredárselas con los campesinos. Podían éstos que fuese el propio Banzer para negociar con ellos y tratar de la situación del país: no fueron escuchados. En cambio, Banzer politizó el movimiento. Por una parte, ha acusado a Cuba de haber planeado la acción y haber enviado «especialistas» para llevarla a cabo, acusando directamente a Carlos Altamirano —dirigente socialista en el exilio— y los «extremistas» del interior. Por otra parte, ha relacionado el movimiento con un supuesto intento de golpe de estado de un grupo militar, del que se da como protagonista al General Eladio Sánchez. El General Sánchez fue relevado de sus altos puestos militares en los primeros días de febrero, y nombrado embajador en el Ecuador, con el fin de alejarle del país; pero no se presentó al puesto y ha desaparecido. Se dice que se le busca activamente en el país, pero también, según algunos rumores, ha podido ser asesinado.

Las matanzas de Cochabamba y la inestabilidad económica y política ponen en situación difícil al presidente Banzer, que ocupa el puesto desde hace treinta meses. El 22 de agosto de 1971, el coronel Hugo Banzer Suárez dio el 187 golpe de Estado de la historia de su país, derribó del poder al General Torres y se instaló en él. Torres había tenido un mandato efímero: autor de un contragolpe en octubre de 1970 (una intentona de la derecha, dirigida por el General Miranda, para tomar el poder) había accedido a la presidencia con el apoyo de campesinos, mineros, estudiantes y proletariado urbano. Torres declaró que «las universidades, los trabajadores, los campesinos y los militares» serían los cuatro pilares de un nuevo

régimen «nacionalista y revolucionario», pero, poco a poco, se había ido apartando de los programas considerados mínimos por la izquierda, y su represión de las guerrillas —que, sin embargo, no se habían opuesto a él— fue dura. Por eso, cuando fue víctima a su vez del golpe de Banzer no tuvo el apoyo de nadie: un movimiento popular trató de evitar el golpe, pero no ya en nombre de Torres, que ni siquiera supo organizarlo. Esta defensa fue rápidamente vencida con docenas de cadáveres en las calles y las prisiones y los hospitales llenos.

Banzer —formación prusiana, como su familia; estilo rudo— suprimió inmediatamente los instrumentos democráticos —las elecciones no interesan—, anunció una acción para «eliminar el imperialismo rojo» y rápidamente realizó la reconciliación de su país con los Estados Unidos —a través de las acciones de la Gulf Oil, que los gobiernos precedentes habían tratado de nacionalizar. Habrían contribuido notablemente al triunfo de Banzer los intereses de la Gulf, los servicios secretos de los Estados Unidos, los 15.000 fusiles y 5.000 ametralladoras enviados por el Brasil —exportador de la contrarrevolución— y los poderosos capitales de los antiguos nazis alemanes instalados en Bolivia y firmemente protegidos por Banzer contra las peticiones de extradición por crímenes de guerra. Su nuevo régimen trató de forzar un equilibrio político: comprendía ministros de la extrema derecha —la Falange, el partido fascista de Mario Gutiérrez, a quien se confió la cartera de Asuntos Exteriores— y de lo que había sido una izquierda en lejanos tiempos, el Movimiento Nacional Revolucionario de Víctor Paz Estensoro, convertido ahora en una vaga izquierda sin ímpetu revolucionario ni mucho menos anti-imperialista, como había sido su original vocación. Se cerraron las universidades, se restableció la pena de muerte, se abarrotaron las cárceles (sin ahorrar siquiera a los miembros del MNR, supuestamente en el poder; uno de los detenidos fue el propio hijo de Paz Estensoro). La mayor oposición visible fue la de la Iglesia: el Cardinal Maurer, arzobispo de Sucre, Monseñor Benedetti, obispo de Cuevo... Numerosos sacerdotes fueron detenidos, expulsados del país o huidos.

En noviembre pasado, Víctor Paz Estensoro decidió tomar su distancia con respecto al régimen. Probablemente no tanto por reticencias morales con respecto a sus procedimientos, puesto que durante más de dos años había colaborado con él, como porque el fino olfato del viejo político le indicaba que la situación estaba podrida para el régimen. Paz Estensoro y sus restos de Movimiento Nacional Revolucionario pasaron a la oposición. Se dice que ha entrado en contacto con el General Torres, que está en el exilio en la República Argentina —el mis-

mo país donde estaba Banzer cuando lanzó el golpe contra Torres—, y que no solamente lo ha hecho Estensoro, sino algunos de los aliados de Banzer, incluso ministros de su gobierno. Quizá el General Sánchez...

Después de los sucesos de Cochabamba y de la defección de Paz Estensoro, de militares como Sánchez y de la unánime condena de la Iglesia (que ha considerado la represión como un «abuso de autoridad» que «pone en peligro la vida de los ciudadanos y entrega la justicia al arbitrio de cada uno»), Banzer ha tenido que apoyarse más resueltamente sobre Falange Socialista. Y ha perdido tres ministros más: el 7 de febrero han dimitido el coronel Acero, ministro de Asuntos Campesinos; el de Estado, Waldo Cerruto, y el del Interior, coronel Walter Castro. Es la quinta crisis ministerial desde que Banzer asaltó el poder; pero, por sus características, parece la más grave.

Se está especulando ya con las po-

sibilidades de sucesión para Banzer, que aparece como condenado a mayor o menor plazo —aun casi por estadísticas históricas: los dos años y medio que lleva en el poder son prácticamente un record en un país que, como queda dicho, ha conocido 187 golpes de estado desde que existe, en 1825: a más de uno por año). Se especula con posibles nombres de sucesor, todos procedentes del Ejército. La mayor parte de los observadores se inclinan en favor del General Torres, quien, a pesar de lo poco eficaz de su experiencia anterior, podría contar ahora con el apoyo de la izquierda como un mal menor, y el mismo concepto de mal menor podrían tener los grupos de la derecha, que temen, sobre todo, una revolución que podría estar dirigida por las centrales obreras y por los campesinos, que si durante muchos años han supuesto una masa rural poco dispuesta a la acción, en estos últimos días parecen estar decididos a acciones mayores.

CHILE

La democracia cristiana se distancia

La tirantez entre el grupo militar que domina Chile y los políticos de la derecha —la democracia cristiana— que abrieron el camino para el golpe y colaboraron inmediatamente con ellos, se está agrandando. Hasta el punto de hacerse sempública. Los demócrata-cristianos han querido desprenderse del exceso de represión; después de una serie de entrevistas de los principales dirigentes del partido con el General Pinochet, presidente de la Junta, y con el General Oscar Bonilla, ministro del Interior, han hecho pública una carta dirigida a Pinochet y firmada por Patricio Aylwin y Osvaldo Olguín, presidente y primer vicepresidente del partido. En la carta dicen que «numerosos chilenos han sido o están siendo privados de su trabajo, detenidos, censurados, amenazados o sometidos a presión de distintas maneras, sin más justificación para ello que las ideas o las opiniones que profesan o que les son atribuidas». Consideran que no hay «ninguna posibilidad real de una defensa adecuada para las personas acusadas», denuncian la prisión preventiva de duración indeterminada contra personas que no se entregan a los tribunales competentes y «el uso de presiones morales y físicas para obtener confesiones». El corresponsal del «Times», de Nueva York, que da noticia de esta carta, afirma que en las semanas siguientes al golpe murieron más de 1.000 personas, la mayor parte de ellas víctimas de ejecuciones sumarias, y que aún hay millares de prisioneros en campos de concentración o en cárceles sin que se haya formulado contra ellos cargos concretos. Según las cifras del gobierno, el número de prisioneros políticos es de 4.000; según la Iglesia, se establece entre 10.000 y 12.000 (1).

Esta tirantez entre los detentadores del poder y sus aliados políticos aparece implícita en la declaración realizada por el Almirante José Toribio Merino, miembro de la Junta, el 4 de febrero: «Si los políticos nos dejan gobernar sin boicotear nuestro programa, en un plazo de cinco años Chile tendrá una renta nacional de un millón de dólares (sesenta millones de pesetas) al mes. Pero esto dependerá en gran medida de la ayuda que nos preste el pueblo y el desdén por los políticos que en cincuenta años de gobierno no han sido capaces de promulgar las dos o tres leyes necesarias que podrían haber evitado lo que ha sucedido en este país» (2). Según Toribio, la situación económica había sido tan degradada por los políticos, que cada niño que nacía en Chile debía ya al exterior, en divisas, el equivalente de 45.000 pesetas.

Al mismo tiempo, el ministro de Economía, Fernando Leniz, hablaba en Washington ante el Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso para explicar que su gobierno «no intentaba entrar en interminables discusiones para justificar sus acciones después de la caída del gobierno de Allende, que había situado la economía de Chile diez años más atrás». En su viaje a Washington, el ministro de Economía, Leniz, ha entrado en contacto con las empresas de Estados Unidos que eran las propietarias de las minas de cobre que fueron nacionalizadas por el gobierno de Allende.

La democracia cristiana es prácticamente el único partido político —si

se exceptúa a los de la extrema derecha, de tipo fascista— que ha colaborado con el gobierno. En las últimas elecciones generales celebradas en el país, en marzo del 73 —que puedan ser las últimas en el plazo de muchos años—, bajo el gobierno de Allende, obtuvo el 30 por 100 de los votos populares, y conservó una mayoría en el Congreso, con la cual obstaculizó la labor económica, social y política del gobierno de Allende; con ello y con sus acciones callejeras y las huelgas patronales —los propietarios de camio-

nes de transporte, los comerciantes— hicieron posible la situación que condujo a la muerte de Allende y la represión que ahora condena. Si la actual Junta intentase un restablecimiento de las condiciones democráticas en el país, tendría que contar fácilmente con la democracia cristiana, cuya condena actual de la represión es también una maniobra política en ese sentido, pero si la Junta prescindiese de este restablecimiento, la democracia cristiana es un obstáculo que puede barrer fácilmente.

GRANADA

Un estado ejemplar entra en la independencia

El mundo tiene, desde la semana pasada, un nuevo país. Se llama Granada —recuerdo de viajeros y conquistadores españoles—, es una isla del archipiélago de las Barlovento y tiene 110.000 habitantes distribuidos en 344 kilómetros cuadrados. La capital es Saint Georges y tiene unos 10.000 habitantes. Al salir de la dominación británica y adquirir su nuevo estado de independencia, el nuevo país ha dado muestras de gran madurez política: la policía se ha apoderado del jefe de la oposición, el abogado Mauricio Bishop, de veintinueve años, y le ha arrojado al más profundo calabozo de Fort Georges, mientras en los elegantes pisos superiores, el primer ministro corregía aún el mensaje de independencia, henchido de la palabra libertad, que dirigiría inmediatamente al pueblo.

El primer ministro es Eric Gairy; sus enemigos le llamaban Lucifer —es posible que ya no se lo sigan llamando— y a él no le disgustaba el apodo. «He tenido muchos enemigos en mi carrera, y han intentado asesinar-me», dice el primer ministro Gairy. «Pero todos yacen ahora en el cementerio». Y añade con una elegante sonrisa: «De muerte natural, desde luego». Sin duda, la providencia le distingue con sus favores y ha ayudado su carrera.

La oposición, el NJM (New Jewel Movement), que dirigía Bishop, pretendía retrasar la independencia hasta que Gairy abandonase el cargo al que le había izado la providencia y la ayuda de los colonizadores británicos, para celebrar elecciones nuevas. Bishop estaba explicando a un periodista inglés su programa político para cuando las elecciones le permitiesen el acceso al poder —un programa de socialismo moderado, con algunas nacionalizaciones y un mejor reparto de la riqueza— cuando la policía irrumpió en su casa, en abundante número, y se lo llevó tras registrarlo todo (una pieza de convicción: el libro «Robe usted este libro», del escritor «hippy» Abbie Hoffman). No se puede decir, sin embargo, que Gairy vaya a gobernar solo. En el Parlamento existe un miembro de la oposición. No podrá,

sin embargo, actuar con gran entusiasmo en los próximos tiempos: está enfermo y su mala salud le ha llevado a reposar a la isla de Jamaica. Allí las muertes naturales son menos frecuentes en las filas de los miembros de la oposición de Granada. Otras personas han decidido ir a descansar a las islas vecinas.

Entre tales muestras de madurez política y de estilo enteramente occidental y americano, Granada ha celebrado con gran esplendor, calippos, fuegos artificiales y disfraces, su conversión en estado independiente. Las autoridades británicas han pasado el poder entre sonrisas y palmadas en la espalda de Eric Gairy, y éste, con su fuerza especial de 200 policías propios, ha terminado rápidamente con las huelgas de comerciantes. Es un defensor de la ley y el orden. La Gran Bretaña ha dotado a su régimen con un regalo de independencia de 100.000 libras esterlinas —como 15 millones de pesetas— y le ha garantizado empréstitos por dos millones y cuarto de libras de aquí a fin de año. El interés británico es que los otros cinco estados asociados del archipiélago encuentren que la vía de su independencia total está en federarse con la Granada de Gairy y formar parte todos de una Comunidad Caribe, con Trinidad-Tobago, Guayana, Barbados y Jamaica. Este tipo de cooperaciones y de mercados comunes es un índice sensato de progreso y de buen entendimiento internacional, y puede representar para Gran Bretaña una interesante zona de influencia, en lugar de unas costosas colonias como eran hasta ahora. Parece, sin embargo, que hay otro alto grupo político bastante interesado en elevar el nivel de vida de los isleños: la Mafia de los Estados Unidos, que considera que estos lugares son auténticamente paradisiacos para el turismo, siempre que haya casinos de juego, bellas muchachas disponibles, una moneda de valor cómico con respecto al dólar y unos interesantes centros de diversión. Encontrarán un interlocutor notablemente comprensivo en Eric Gairy, que, además de primer ministro, es propietario de algún «night-club» y, por lo tanto, conoce las virtudes del negocio.

(1) Véase en las páginas 17 y 18 de este mismo número una información acerca de los refugiados chilenos en Europa.